



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, doce (12) de julio de dos mil veintidós (2022)**

Demandante: DORA CECILIA SUÁREZ MORENO  
Demandados: ACP COLPENSIONES,  
AFP PROTECCIÓN S.A, y  
PENSIONES DE ANTIOQUIA  
Radicado: 05001 31 05 013 2019 00714 01  
Sentencia: S-169

Procede esta Sala de Decisión Laboral a dar cumplimiento a la orden de tutela dada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STL8362-2022, Radicación nº 66878, dictada el 16 de junio de 2022 y notificada el 05 de julio del presente año.

Promovida por PENSIONES DE ANTIOQUIA en contra del fallo proferido el 8 de febrero de 2022 por este Tribunal, aquella Corporación dispuso lo siguiente:

**“PRIMERO: CONCEDER** el amparo al derecho fundamental al debido proceso de **PENSIONES DE ANTIOQUIA. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO** la sentencia del 8 de febrero de 2022 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, para que en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una nueva decisión teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído. **TERCERO: NOTIFICAR** a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. (...)”.

Obrando en consecuencia, SE DEJA sin efecto el proveído en cuestión por medio del cual esta Sala había resuelto,

**“CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el día 14 de mayo de 2021, en cuanto DECLARÓ la ineficacia de la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual administrado por la AFP PROTECCIÓN

S.A. por falta de consentimiento informado; pero con las siguientes novedades según se dijo en la parte motiva: **1. La REVOCA** en cuanto ordenó el regreso de la Sra. DORA CECILIA SUÁREZ MORENO a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES-, para en su lugar, ABSOLVER A COLPENSIONES por este concepto. Se ORDENA la reactivación de la demandante al régimen de prima media administrado en este caso por PENSIONES DE ANTIOQUIA, sin solución de continuidad, con el traslado de la totalidad de valores recibidos con ocasión de esa afiliación, incluyendo frutos y rendimientos causados, así como las cuotas de administración, salvo lo relacionado con los aportes al fondo de garantía de pensión mínima, ni las primas de seguros previsionales, por lo dicho en la 16 05001 31 05 013 2019 00714 01 parte motiva. **2.** Se ordena a PENSIONES DE ANTIOQUIA activar la afiliación de la Sra. DORA CECILIA SUÁREZ MORENO al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por esa entidad, y a recibir los valores antes descritos. Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. y a favor de la demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de \$1.000.000. Notifíquese por EDICTO.

Por consiguiente, es pertinente proferir una nueva sentencia en los términos ordenados en el fallo constitucional, la cual quedará así:

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha, doce (12 ) de julio de 2022, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a dar trámite al recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A. en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el día 14 de mayo de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES**

DORA CECILIA SUÁREZ MORENO, demandó a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se DECLARE la nulidad o la ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y, en consecuencia, se declare que permaneció afiliada sin solución de continuidad en el Régimen de Prima Media, ordenando a PROTECCIÓN S.A. que traslade a COLPENSIONES la totalidad de aportes recibidos durante la vinculación.

Solicitó igualmente OFICIAR a la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA para que expidiera el Bono Pensional correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de febrero de 1983 y el 30 de abril del 2000 afiliada como trabajadora de la Contraloría General de Antioquia, para ser incorporado en la historia laboral.

### **LOS HECHOS**

Expone, como fundamento de sus peticiones, que nació el 29 de junio de 1964, que inició su vida laboral el 23 de febrero de 1983 hasta el 30 de abril del año 2000 afiliándose como empleada en la Contraloría General de Antioquia, en el cargo de Auditora, cotizando 695 semanas; se trasladó al fondo de pensiones PROTECCIÓN S.A. el 01 de agosto de 2001, administradora en la que se encuentra actualmente afiliada contando con 796 semanas cotizadas; que el asesor de PROTECCIÓN S.A. que le realizó la afiliación le expresó que el Instituto de Seguros Sociales se iba a liquidar, además de que no se le informó sobre las características del Régimen de Ahorro Individual -RAIS-. Agrega que el 29 de agosto de 2019 radicó derecho de petición ante PROTECCIÓN S.A., solicitando información acerca de su historia laboral, la afiliación a dicho fondo y la proyección de su mesada pensional; el 05 de septiembre de ese mismo año, PROTECCIÓN S.A. en respuesta a lo anterior, le allegó copia del formulario de afiliación y de la historia laboral consolidada, informándole que alcanzaría en su caso una devolución de saldos.

Que el 02 de septiembre de 2019 radicó derecho de petición ante PENSIONES DE ANTIOQUIA solicitando la historia laboral; el 09 de septiembre de 2019 dicha entidad le indicó que esos formatos los conservaba la Gobernación de Antioquia.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento de la demandante y el traslado a PROTECCIÓN S.A.; que no le constan los demás hechos por cuanto son afirmaciones de la actora para avalar sus pretensiones. Aclara que la demandante no tiene ninguna relación sustancial con Colpensiones, pues siempre ha estado afiliada en el RAIS desde el 2001 y no ha sido afiliada en el ISS, hoy Colpensiones. Se opuso a las pretensiones y como excepciones propuso falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, prescripción, imposibilidad de condena en costas y buena fe.

PROTECCIÓN S.A., destaca la suscripción de manera libre y voluntaria por parte de la demandante, del formulario de afiliación en esa administradora el 6 de marzo del 2000 como traslado proveniente de PENSIONES DE ANTIOQUIA, acreditando para ese momento 821.86 semanas cotizadas; acepta la respuesta a la solicitud presentada por la actora. Niega la afirmación de la demandante respecto a la asesoría brindada por esa entidad, en la que se le informó que el ISS se iba a liquidar, por cuanto sus asesores nunca han hecho esa manifestación pues se caracterizan por su profesionalismo y conocimiento del régimen de ahorro individual. No le constan los demás hechos. Se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que el acto de afiliación a la AFP PROTECCIÓN S.A. es válido y exento de vicios del consentimiento. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP e inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional.

Mediante auto del 3 de marzo de 2020, el Juzgado dispuso la vinculación al proceso como litisconsorte necesario por pasiva de PENSIONES DE ANTIOQUIA, entidad que luego de la respectiva notificación se pronunció indicando que no le consta la fecha de afiliación de la demandante a esa entidad, pues no hay registro que le permita negar o afirmar ese hecho, solo se conoce que estuvo afiliada a PENSIONES DE ANTIOQUIA, hasta el 30 de abril de 2000. Sobre el traslado al RAIS administrado por PROTECCIÓN S.A. dice que le corresponde a ese fondo pronunciarse al respecto. Se opuso a las pretensiones por tratarse de un fondo cerrado de pensiones de manera que es a COLPENSIONES a la entidad que la demandante debería regresar en caso de declararse la ineficacia de la afiliación. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, buena fe y exoneración del pago de costas.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del 14 de mayo de 2021, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín dispuso: i) DECLARAR la ineficacia de la afiliación de la señora DORA CECILIA al RAIS administrado por PROTECCIÓN S.A.; ii) CONDENÓ a la AFP PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo para el efecto cotizaciones, cuotas y/o gastos de administración vigentes a partir del 01/05/2000, con los rendimientos que se hubieren causado, como si hubiera permanecido en el RPM. En concordancia, ORDENÓ a COLPENSIONES a recibir tales sumas de dinero; iii) CONDENÓ a COLPENSIONES a activar la afiliación de demandante al RPMPD.; iv) DECLARÓ probada de manera oficiosa la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de PENSIONES DE ANTIOQUIA; las demás excepciones propuestas por las demandadas se declararon improbadas, v) CONDENÓ en COSTAS a PROTECCIÓN S.A. fijando agencias en derecho en la suma de \$908.526.

### **DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN**

Inconforme con lo decidido, la apoderada de PROTECCIÓN S.A. interpuso recurso de apelación dirigido específicamente al traslado de las cuotas de administración y seguro provisional a COLPENSIONES. Quedó probado que durante el tiempo que la demandada estuvo vinculada con PROTECCIÓN S.A., hubo una correcta administración de los dineros, soportado en los altos rendimientos que se generaron en su cuenta de ahorro individual, por lo que, condenar a la devolución de estos dineros, sería castigar al fondo por la excelente gestión en la administración de los dineros del ahorro individual y un enriquecimiento sin causa para Colpensiones, la cual nunca administró la cuenta de ahorro de la demandante. Descuentos que la ley 100 en su artículo 20 permite. Agrega que las cuotas de administración y seguro provisional tienen una naturaleza diferente a la de la pensión, por lo cual le son operables los términos de prescripción parcial. Respecto al seguro provisional el mismo es contratado por una entidad de seguros; PROTECCIÓN S.A. mes a mes ha pagado las pólizas obligatorias, de modo que, en caso de IVM el afiliado cuente con aseguramiento, dineros que no serán devueltos por la aseguradora en caso de no ocurrir.

Por su parte COLPENSIONES solicita se adicione la sentencia de primera instancia en cuanto a los valores que debe trasladar la AFP PROTECCIÓN, pidiendo se reintegren -además- las cuotas abonadas al fondo de garantía de pensión mínima y el porcentaje destinado al pago de seguros previsionales, sumas que deben ser indexadas.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión solicitando que, en el evento de confirmar la sentencia de primera instancia, esta sea adicionada en el sentido de ordenar a la AFP PROTECCIÓN S.A. que devuelva o traslade a Colpensiones todos los valores que hubiere recibido durante el tiempo de permanencia de la actora en la AFP y que se haya causado con motivo de la afiliación o traslado, es decir

que no se traslade solo los recursos de la cuenta individual de la demandante junto con sus rendimientos y cuotas de administración como lo ordenó la a quo, sino también, lo que corresponde a seguros previsionales y descuento de la garantía de pensión mínima, incluyendo la respectiva indexación.

### **C O N S I D E R A C I O N E S:**

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **(i)** DORA CECILIA SUÁREZ MORENO nació el 29 de junio de 1964; **(ii)** el 23 de febrero de 1987 se vinculó como trabajadora al servicio del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA- hasta el 30 de abril del 2000, entidad en la que se le hacían los descuentos para seguridad social destinados a PENSIONES de ANTIOQUIA; y **(iii)** a partir del mes de mayo del 2000 comenzó a realizar cotizaciones al RAIS, administrado por la AFP PROTECCIÓN S.A., luego de la suscripción del formulario de afiliación el 06 de marzo del 2000 (expediente digital fl 168).

Con lo anterior establecido, corresponde a la Sala verificar si el traslado que la demandante efectuó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), cumple con las condiciones legales y jurisprudenciales exigidas para considerar que resultó eficaz, o si, por el contrario, es posible entender que esa afiliación nunca ha surtido efectos y en esa medida sería procedente ordenar el retorno, ya sea a COLPENSIONES o a PENSIONES DE ANTIOQUIA, situación que también se debe determinar.

Al respecto importa reiterar, tal y como se ha dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008,

en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación y, adicionalmente, se ha establecido que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que el afiliado no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba que acredite que esa obligación sí se cumplió.

Así lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años, como ha ocurrido por ejemplo en las sentencias SL 12136 de 2014, SL 17595 de 2017, SL 1421 de 2019, SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 2611 de 2020, SL 1741 de 2020, SL 1741 de 2021, SL 3537 de 2021 o más recientemente la SL 1055 del 2 de marzo de 2022 y la SL 2058 del 4 de mayo de 2022, entre muchas otras. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

*"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."*



Del desarrollo jurisprudencial citado se pueden evidenciar una serie de ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) no es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no existen pruebas que permitan tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas de la afiliada, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información a la afiliada, al no suministrarle, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación, no puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin

presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

Ahora bien, **en cumplimiento de la orden de tutela proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 16 de junio de 2022 antes citada**, sobre la procedencia de ordenar el retorno de la señora SUÁREZ MORENO, ya sea a PENSIONES DE ANTIOQUIA o a COLPENSIONES, corresponde indicar que, en este caso en el que la demandante se trasladó al RAIS estando afiliada a un fondo previsional del sector público como lo era PENSIONES DE ANTIOQUIA, al declararse judicialmente la ineficacia del acto jurídico de traslado, como las cosas vuelven a su estado anterior, aquella debe ser *“redirigida”*, según el término de la Corte, a la administradora COLPENSIONES, pues es la única AFP que actualmente administra las afiliaciones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Lo anterior, atendiendo los argumentos del fallo constitucional en mención, en el que se consideró frente al tema que,

*“Al respecto conviene recordar que el artículo 52 de la Ley 100 de 1993 autorizó a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado, administrar el régimen de prima media con prestación definida respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan, sin perjuicio del derecho de selección de régimen.*

De igual manera, el Decreto 2527 de 2000 en su artículo 3° dispuso que los servidores públicos que a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones se encontraban afiliados a las cajas, fondos o entidades de seguridad social de que trataba el inciso segundo del artículo 52 de la Ley 100 de 1993 y se desvincularan de la entidad pública a través de la cual estaban afiliados a dichas cajas, fondos o entidades, para continuar cotizando al sistema general de pensiones deberían afiliarse al Instituto de Seguros Sociales o a una administradora de pensiones del régimen de ahorro individual, salvo que su vinculación a la otra entidad se produjera sin solución de continuidad, esto en los términos del artículo 60 del Decreto-Ley 1042 de 1978.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal debió tener en cuenta que para el caso de que se acreditara la ineficacia del traslado que realizó la accionante de Pensiones de Antioquia al régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS, el regreso al statu quo implicaba que aquella debía ser redirigida al único ente que hoy administra las afiliaciones del régimen de prima media con prestación definida, esto es, el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones-, que asumió esta obligación de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto Extraordinario 4121 de 2011.

En ese escenario, a Colpensiones es a quien corresponde recibir la totalidad de los aportes realizado por la demandante a Protección, pues, se itera, los fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado, conservaron la facultad legal de administrar el régimen de prima media, y la accionante cotizó a Pensiones de Antioquia, lo que implicaba considerar que la vigencia de su afiliación lo fue al régimen de prima media con prestación definida, siendo que la migración al régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS se tornó en un verdadero traslado de régimen pensional, por lo que la consecuencia de la declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS, debía ser que se tenga a la demandante como perteneciente al régimen de prima media con prestación definida que actualmente es administrado por Colpensiones.

Lo anterior se acompasa por lo dicho por esta Sala, entre otras providencias, en la SL4334-2021, SL2208-2021 y SL1637-2022.

(...)"

Consecuente con lo anterior, será CONFIRMADA asimismo la decisión de primera instancia en este aspecto, en el que se ORDENÓ la reactivación de la demandante al régimen de prima media administrado por COLPENSIONES, sin solución de continuidad.

### **Devolución cuotas de administración y otros conceptos.**

Tema que se estudia en virtud de lo apelaciones presentadas tanto por PROTECCIÓN S.A. como por COLPENSIONES. Al respecto, basta indicar que en múltiples pronunciamientos se ha considerado que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a la administradora del Régimen de Prima Media respectiva, de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada afiliado, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que se ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales,** toda vez que*

*este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

*(...)*

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

*(...)"*.

En consecuencia, la decisión de primer grado será ADICIONADA en el sentido de ordenarle a la AFP PROTECCIÓN S.A. que proceda con la devolución no solo del valor de las cotizaciones y de sus rendimientos financieros o intereses causados, sino también de los porcentajes que en su momento fueron descontados por dicha AFP de las cotizaciones de la demandante destinados a comisiones de administración, pago de primas de seguros previsionales, pago de prima de reaseguro de Fogafín y al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Esto por cuanto se estima que, en la parte resolutive del fallo de primer grado, la funcionaria judicial no fue precisa en este aspecto de la decisión.

### **Indexación.**

Atendiendo a lo peticionado por parte de la ACP COLPENSIONES al sustentar la impugnación, la orden a PROTECCIÓN S.A. de trasladar los conceptos anteriormente mencionados debe incluir la respectiva indexación, según lo ha indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Esta Corporación ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara y reciente en la

sentencia SL 3349 del 28 de julio de 2021, rad. 88826 en la que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *“... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar.”*

### **Excepción de prescripción.**

Todo lo anterior sin que resulte procedente la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

*“En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021).”*

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima - tema recurrido por la PROTECCIÓN S.A. - toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de dicha AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en

consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidas a la prescripción.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., por haber sido vencida en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.000.000 a favor del demandante.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el día 14 de mayo de 2021, pero la **ADICIONA** en el sentido de ordenarle a la AFP PROTECCIÓN S.A. que proceda con la devolución no solo de las cotizaciones y de sus rendimientos financieros o intereses causados, sino también de los porcentajes correspondientes a comisiones de administración, seguros previsionales y reaseguros, y los aportes destinados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, durante el tiempo en que la demandante estuvo afiliada a esa entidad. Se advierte que la orden a PROTECCIÓN S.A. de trasladar los anteriores conceptos, incluye la respectiva indexación, excepto los relativos al capital contenido en la cuenta de ahorro individual de la demandante y sus rendimientos financieros o intereses causados.

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.000.000 a favor de la demandante.

**TERCERO:** Con la anterior providencia la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, da cumplimiento a la orden constitucional proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte

Suprema de Justicia el 16 de junio de 2022, N° STL8362-2022, radicación 66878.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7ce0f75b43506b94298a5c411688887daa3d0494b2c8907de49d4f114b58248b**

Documento generado en 12/07/2022 03:22:39 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>